

México 2018: ¿Qué está en juego?

Mariano Sánchez Talanquer
Harvard University

México celebra este año sus cuartas elecciones presidenciales de la era democrática. Cerca de 90 millones de personas tienen derecho a participar. 1.5 millones, seleccionadas mediante democrático sorteo y capacitadas a domicilio por un eficiente organismo electoral, contarán los votos en unos 160 mil puntos de votación repartidos por el país. ¿Qué está en juego? Sin afán de abarcarlo todo, subrayo cuatro temas críticos, cuatro aspectos básicos de la vida pública en los que las elecciones no significarán un quiebre de la historia, pero tendrán repercusiones importantes.

1. Las instituciones democráticas

Comienzo por la relevancia del proceso para la propia salud del sistema democrático. La democracia mexicana es una democracia joven. El país ha celebrado sólo tres elecciones presidenciales libres y equitativas (2000, 2006 y 2012), una de las cuales (2006) culminó en un agudo conflicto poselectoral. No quiero decir que pesa sobre ella un riesgo inminente. Pese a que deambula por terreno escabroso, la protegen algunos seguros institucionales y ciertos anticuerpos.

El sistema de partidos es equilibrado y ofrece alternativas que a la mayoría parecen chocantes (como en casi todos lados), pero—y es crucial—de una diversidad ideológica hasta ahora medianamente reconocible. El descrédito de sus miembros tradicionales es palpable, acaso irreversible, pero a la fecha mantienen su capacidad electoral. La competencia es intensa y las elecciones auténticas. La prensa es mediana y enfrenta dificultades, pero hay excepciones notables, cierto pluralismo y voces críticas e independientes. Como en todos lados, las redes sociales han abierto el juego de la difusión de información, fidedigna y no. La esfera pública, pese a los sesgos socioeconómicos de siempre, es más libre y robusta que en el pasado. Fuera de la arena electoral, una colección de grupos y organizaciones conforman una sociedad civil más exigente y autónoma.

Pero como oportunamente recuerdan Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (*How Democracies Die*, Crown Publishing, 2018), todo sistema democrático descansa sobre ciertas normas informales. Un conjunto de acuerdos tácitos sin los cuales, independientemente de cuán perfectas sean las leyes, la democracia se vuelve disfuncional y puede llegar a pudrirse desde adentro, lentamente y sin estruendo.

Dos de ellos, imprescindibles, son el reconocimiento mutuo y la contención institucional. El primero se refiere a que todas las fuerzas políticas de peso se reconozcan unas a otras como legítimas. Independientemente de la profundidad de los desacuerdos o la intensidad de la competencia, no se pone en cuestión el derecho de los adversarios a existir políticamente, participar en la arena electoral e incluso, ejercer el poder. La segunda, que se sigue de la anterior, significa que los cargos y aparatos del Estado no se utilizan de manera parcial en contra de los enemigos. Aquellos que se encuentran en posiciones de poder en un momento determinado, no despliegan los instrumentos institucionales que controlan para sacar ventaja indebida y atacar selectivamente a sus rivales.

Un vistazo rápido al contexto global, pasando por Estados Unidos, es suficiente para mostrar lo temerario que puede ser dar esas normas por sentadas. En México, los compromisos implícitos que sostienen a la democracia no son particularmente fuertes. No es infrecuente oírlos chirriar al calor de las contiendas. Las pulsiones antidemocráticas atraviesan el espectro político. Como hijo del régimen autoritario, el PRI ha heredado una larga tradición de abuso del aparato estatal para contrarrestar a los opositores. El menú va del desvío de recursos públicos a las campañas electorales hasta el acoso judicial, pasando por viejas artimañas de divide-y-vencerás. Esos reflejos autoritarios han mutado para adaptarse a un entorno más exigente y democrático, sin extinguirse.

En 2006, el propio PAN, que luchó arduamente por la apertura democrática, cambió el papel de víctima por el de victimario y atentó desde el gobierno contra las normas informales de la democracia. Mediante argucias legales y el despliegue partidista de la procuración de justicia, intentó cerrar el paso a Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda que encabeza otra vez las encuestas, ahora bajo las siglas de MORENA (a unos ochenta días, aventaja a su competidor más cercano por entre 10 y 15 puntos porcentuales).

En este mismo proceso electoral, han surgido ya preocupaciones razonables de uso faccioso, cuando menos selectivo de la justicia del PRI en el gobierno. Las acusaciones incluyen una presunta maniobra para desbancar del segundo lugar a Ricardo Anaya, el joven y electoralmente inexperto, pero astuto candidato panista de una coalición que agrupa al propio PAN, Movimiento Ciudadano y los restos del PRD, tras su rompimiento en 2012. El talante tecnocrático arraigado en ciertos niveles altos del Estado estrecha también el margen de lo que puede legítimamente discutirse, las posturas que se vale asumir. La verdad científica está por encima del conflicto político.

En la retórica de la izquierda electoral (y en política, el lenguaje importa), la oposición constituye una “mafia del poder” que subyuga a la sociedad entera, con cómplices en la élite económica y los organismos electorales mismos. Parafraseando a Juárez, el Liberal histórico en las guerras decimonónicas con los Conservadores, el líder de MORENA concibe el triunfo de la oposición (“la

reacción,” para el juarismo) como “moralmente imposible” (la democracia representativa no floreció en el diecinueve). La derrota entonces sólo puede ser hija del fraude electoral (el supuesto de 2006) o la compra de voluntades (el de 2012), pero no una consecuencia genuina del pluralismo político—es decir, fruto de la existencia de adversarios legítimos que gozan de respaldo auténtico, si se quiere moralmente admisible. La redefinición del conflicto político como una oposición entre pueblo y una élite expoliadora, con todo y su potencial transformador, es una de las formas de negación del pluralismo netamente político.

Mientras tanto, algunos de los guardianes institucionales del juego democrático, encargados de que la competencia se mantenga dentro los márgenes, parecieran en ocasiones dispuestos a prestarse al juego sucio de los competidores. La organización imparcial de los comicios no está en duda. Pese a las sacudidas retóricas a las que lo someten a conveniencia los competidores—con consecuencias no triviales: según Consulta Mitofsky, un tercio del electorado confía poco o nada en el Instituto Nacional Electoral (INE) desde el descalabro de 2006, y hoy sólo 15% confía mucho—el INE es garantía en lo esencial (y los votos, después de todo, los contarán ciudadanos sorteados, a ojos de todos). Preocupa, no obstante, el máximo Tribunal Electoral, quien administra justicia y tendrá la última palabra sobre la validez legal de la elección. La última (no es la única): una decisión que hizo hueco en la boleta presidencial a un aspirante (Jaime Rodríguez, “El Bronco”) sin las firmas ciudadanas necesarias para registrar una candidatura independiente, según la inequívoca letra de la ley—la aritmética es necia, piruetas judiciales aparte. En el camino, firmas falsas y otras simulaciones documentadas por el INE, pero dispensables para el veleidoso Tribunal, dispuesto a abrir atajos.

Al fondo, lo que se vislumbra es la fragilidad de las normas informales de reconocimiento mutuo y contención institucional. Cuando los principales actores políticos están dispuestos a transgredir o estirar al límite sus normas fundacionales, es muy difícil para una democracia funcionar, asentarse y generar acuerdos en pos de los intereses colectivos. Muestra también una miopía cercana a la ceguera, que un básico instinto de supervivencia—si no las convicciones—debería servir para contrarrestar. Resistir las tentaciones hoy y apegarse a los acuerdos que hacen posible nuevas rondas del juego es la responsabilidad básica de los competidores, pero también la condición misma de su existencia mañana. Lo que ocurra en el proceso electoral es clave. Si la competencia es intensa pero leal, y todos los involucrados admiten lo que dicten los votos, México puede encaminarse hacia una democracia más sólida y funcional. Lo contrario profundizaría las grietas (y el horno, dentro y fuera, no está para bollos).

2. La representación política

Las elecciones de este año importan también para la organización de la representación política. Desde la transición, tres grandes referentes partidistas estructuran el espacio político. Hoy nuevamente se reparten el grueso de las preferencias electorales (con MORENA ocupando el lugar del PRD, que ha diluido su identidad histórica y asumido el rol de socio minoritario en alianza con el PAN), pero esa estructura de oposiciones e identidades muestra signos de agotamiento. No es claro que en el futuro pueda seguir encauzando las demandas de representación ni ordenando a los aspirantes políticos, que buscan aprovechar el desprestigio de los partidos tradicionales, incluso de la noción misma de partido político—la institución central de la democracia representativa.

La personalización de la oferta política toda, la concentración casi única en los atributos individuales, es sólo un síntoma del debilitamiento de las identidades partidistas. La palabra “partido”, por si acaso, se borra de las etiquetas en competencia. Acaso el ejemplo más irónico proviene del histórico PRI. Lastrado por un gobierno impopular y envuelto en la sombra de la corrupción, el gran partido de masas del siglo XX mexicano otorgó la candidatura presidencial a José Antonio Meade, un funcionario de perfil tecnocrático, a tono con la élite global de las últimas décadas (hoy en varias partes a la defensiva), pero forjado lejos de las filas del partido, figura de gabinetes presidenciales también del PAN, sin recorrido electoral alguno. Cuando la representación está fracturada, lejanía de la política partidista y simple honradez pueden parecer cualidades excepcionales.

Según datos del Latin American Public Opinion Project, la proporción de mexicanos que declara (¿admite?) simpatizar con algún partido tocó en 2017 los niveles más bajos desde la democratización (19%, contra un 35 a 40% promedio en la década anterior). 76% confía nada o muy poco en los partidos (contra 47% en 2006 o 53% en 2012). Los partidos en sí nunca fueron especialmente populares (no son en ninguna parte), pero significaban algo identificable y para la mayoría importante—democracia o continuismo autoritario, nacionalismo económico o reformas de mercado. El contenido programático de la competencia no se ha difuminado del todo, pero brotan sólo destellos esporádicos.

Además está el cambio generacional, que para bien o para mal va volviendo huecas las luchas del pasado. Un 16% del electorado vota por primera vez, 40% tenía menos de 16 años cuando la primera alternancia democrática en 2000. Si fechamos el inicio de la democracia en 1997, 50% de los ciudadanos con derecho a votar en esta elección carece por completo de memoria propia, adulta, del autoritarismo mexicano. Y como sea, un sector social, sin fronteras muy definidas pero ruidoso, considera que “todos son iguales.” Así lo aseguran también los especuladores políticos, pescadores en río revuelto.

Tampoco entre las élites políticas y activistas los partidos parecen los referentes de antes. Aunque habitados por tribus y corrientes, en los partidos mexicanos había algunas convicciones compartidas, un cierto sentido de propósito. Si se quiere, un apego afectivo a la camiseta, que se realimentaba durante las batallas de los ochenta y noventa, y servía para mantener la cohesión. Ahora, el cemento es poco más que la suma del financiamiento público, los espacios en la televisión y la radio y las ventajas competitivas que otorga el control partidista de los cargos públicos. No son recursos triviales, y quizá quedan residuos de la mística del pasado. Hasta ahora alcanza para seguir aglutinando el grueso de las ambiciones políticas.

Pero conscientes del descrédito, los políticos buscan nuevas oportunidades. Es mayor la disposición a refugiarse en partidos menores, o aliarse con antiguos rivales ideológicos (pocos habrían apostado en 1988 o tan cerca como 2006 por una alianza PAN-PRD, una década más tarde). También a participar en aventuras (una fractura en el disciplinado PAN desencadenó la candidatura independiente de Margarita Zavala, panista de cepa y esposa del expresidente Calderón por el mismo partido). Puede tratarse de una recomposición gatopardista del sistema de representación, pero es claro que la camiseta de los partidos se ha devaluado y hay menos contención de los instintos por patear el pesebre. Cualquier observador mínimamente atento reconoce, como los aspirantes políticos mismos, que el clima es ahora otro. La elección de este año es un episodio importante de esta historia, sea cual sea su desenlace.

3. Violencia, orden público y derechos humanos

Como en 2012, las elecciones tienen como trasfondo una severa crisis de inseguridad, violencia criminal y procuración de justicia. Pero han pasado seis años más. El trauma y los agravios se siguen acumulando, sin que existan signos reconocibles de mejoría. Tampoco una narrativa convincente o sensible a las muy diversas formas de criminalidad, violencia y conflicto local, más allá del relato de la guerra entre y con grandes organizaciones criminales, un paraguas que se abre para casi todo—el Chapo Guzmán, la piratería, el secuestro, o el robo de combustible. En las esferas de decisión gubernamental, prevalece un entendimiento esencialmente militar-policivo de la alta incidencia delictiva.

El problema no es sólo ya que el relato resulta poco creíble, sino los altísimos costos humanos a más de una década de la explosión de la violencia (la tasa de homicidio por 100 mil habitantes, de 8 en 2007, supera ahora los 20 puntos). A ello se suman los abusos a los derechos humanos vinculados al despliegue militar, los ajustes de cuentas de distinto signo que se refugian bajo el manto de la violencia “narca,” los ataques a activistas sociales y periodistas (más de cuarenta periodistas

asesinados en este sexenio). Encima, el particular sentido de indefensión, por no hablar de resentimiento, que germina en la sociedad cuando se iluminan redes de protección y violencia criminal que abarcan a funcionarios públicos y órganos gubernamentales—el Leviatán como fuente de *inseguridad*.

Los partidos tienden a esquivar un problema que los implica a todos, sin soluciones rápidas y en el que los funcionarios civiles se han vuelto, trágicamente pero en buen grado, dependientes de las fuerzas armadas. El problema es estructural, propiamente de Estado. No se irá de la noche a la mañana. Aun así, en las elecciones de este año puede estar de por medio un cambio de enfoque, un giro cualitativo de la política que emana del gobierno federal en la materia. Hasta donde se alcanza a ver, existen visiones encontradas en competencia, que sí pueden tener implicaciones importantes.

Las posturas se dibujaron ya a fines del año pasado, a propósito de la aprobación de una nueva ley de seguridad interior—reclamada públicamente desde las fuerzas armadas y promovida por el gobierno y sectores del PAN vinculados al ex-presidente Calderón—para otorgar certeza y protección legal a los militares en su participación rutinaria en la seguridad pública. El PRI y el grueso de la derecha partidista apuestan por la continuidad, dando cauce al clamor, bastante entendible pero también peligroso, de protección, mano dura, Ley y Orden. El Frente PAN-PRD-MC, heterogéneo, se desmarca en algunos puntos y trata de evitar las incomodidades. Pero el discurso dominante está bastante extendido—en esencia, profesionalización policiaca, centralización de mando, mejor coordinación entre instituciones de seguridad. Mientras tanto, despliegue militar indefinido.

La voz más disonante proviene de MORENA, aunque las soluciones en materia propiamente policiaca y de justicia, urgentes, tampoco difieran demasiado. La postura de campaña dirige en cambio la atención al sustrato económico y social de la delincuencia, la falta de oportunidades y la pérdida de expectativas de movilidad social. Trabajo precario y generalmente mal pagado, exposición a agudos contrastes sociales, retraimiento del Estado en pos de la cultura del mercado, expectativas incumplidas y un futuro que no pinta mucho mejor, en un país donde el 60% de la población no rebasa los 35 años. Mientras tanto, una economía ilegal pujante. Parecería un cliché señalar la base social de la violencia, el entorno social y económico en el que la actividad económica ilegal e informal ejerce su fuerza de atracción. No obstante, el gesto aporta porque no es, desde hace diez años de violencia, lo que domina la conversación.

Nadie se aventura, acaso con razón, a proponer sin ambages un retiro militar inmediato, ni quiere enojar de más a las fuerzas armadas. Frente al monstruo de mil cabezas y evidentes debilidades en el aparato civil de seguridad y justicia, no sobra la prudencia (el reloj no se puede echar para atrás). No obstante, el candidato puntero se ha referido abiertamente a la militarización como una estrategia

fallida, puesto a flotar la idea de amnistía por ciertos delitos y cuestionado el uso de la fuerza militar como la principal respuesta pública—no se “apaga el fuego con el fuego.” Su partido—el pronombre es válido, por el carácter marcadamente personalista—se opuso a la polémica ley de seguridad de interior. En medio del ruido, se distingue ya un giro histórico importante. Sin disimulo, uno de los principales contendientes en las elecciones, con otros críticos de la actuación militar, han sido blancos de intervenciones públicas de los mandos militares en el debate político-electoral, impensables en algún momento de la historia mexicana.

Cuatro cosas parecen obvias. 1) El antiguo lugar de los militares en el sistema político mexicano heredero de la Revolución, ha cambiado. 2) Hace falta, en grandes áreas del país, un proyecto democrático creíble de construcción de las instituciones civiles del Estado, cuyos fines últimos sean no la derrota de “los criminales” en el campo de batalla (las calles), sino la paz, el acceso a la justicia y los derechos humanos—los primeros, a la vida y la seguridad personal. 3) Tal proyecto pasa necesariamente por el aparato coercitivo, pero no sólo así hace presencia el Estado (no debería hacerlo). 4) Hay intereses serios en juego (el control de la fuerza física, nada menos) y aunque sin explicaciones muy convincentes, enfoques distintos entre las fuerzas políticas que aspiran a dirigir al Estado. Por eso también importan las elecciones de este año.

4. Política económica y social

Desde la elección de 1988, y claramente después de la alternancia de 2000, el modelo de desarrollo y el papel económico y social del Estado son el principal eje que estructura la competencia, la línea divisoria más sustantiva entre partidos. La insatisfacción con la representación en su conjunto es obvia. El debate programático es esporádico, generalmente pobre. Pero la fractura dota a la competencia en el sistema de partidos de sentido y contenido. Acaso es el sostén mismo del sistema—da salida en la arena política a intereses y visiones encontradas, realmente existentes, respecto al crecimiento y la redistribución. No es irrelevante.

PRI y PAN han liderado la defensa del modelo de mercado, con sus componentes de sobra conocidos (disciplina fiscal, baja inflación, libre comercio, estímulo a la inversión extranjera, contención salarial para la competitividad internacional, ampliación del campo para la participación privada, política social enfocada y sin despilfarros, etcétera). En estos comicios, el candidato del PRI busca además defender las reformas legislativas conseguidas por el gobierno actual, en especial la apertura del sector energético a la inversión privada y una reforma educativa dirigida a la profesionalización de la carrera magisterial, que se topa con fuerte resistencia de movimientos sindicales de maestros. Es, naturalmente, la voz de la continuidad.

Tampoco intranquiliza al sector privado la coalición que encabeza el PAN, que desde el centro-derecha ha acompañado el modelo en la oposición y en el gobierno. Esta vez, sin embargo, los apoyos que ha sumado de agrupaciones partidistas y sociales en el centro y centro-izquierda (el PRD, MC, sectores de la sociedad civil), no identificadas con MORENA, otorgan a la campaña un tono social moderadamente distinto al del panismo habitual. Sin desafiar la ortodoxia, la coalición ha hecho suyas propuestas de incremento al salario mínimo y adopción de una renta básica universal (sin demasiadas explicaciones). Tratando de capturar el ancho centro, la coalición se presenta a sí misma como la alternativa moderna entre las corruptelas del PRI y el viejo nacionalismo económico. No es para nada descartable un cierre de la contienda, en la medida en que las campañas suban de tono, el anti-lopezobradorismo (un partido sin partido) despierte y encuentre su refugio.

Las posibilidades de una reorientación más notoria de la política redistributiva y de desarrollo descansan en el probable triunfo de López Obrador, quien habiendo forjado su carrera política en oposición a las reformas de mercado, busca la presidencia por tercera ocasión. Su programa polariza; lo hace sobre todo su modo de ser—fuerza y debilidad de un movimiento intrínsecamente personalista. Pero las condiciones de hoy parecen otras, más propicias. El discurso es por ahora deliberadamente más conciliador y sereno, de raigambre propiamente cristiana (la alianza con el partido Encuentro Social, con vínculos a las iglesias evangélicas, ha revivido las críticas al conservadurismo social del líder de la izquierda; su planteamiento para robustecer los mecanismos de consulta popular se extiende a temas como el aborto y las libertades sexuales).

Y cae también sobre terreno distinto. Por un lado, la ya muy larga crisis de violencia criminal, campo fértil para invocaciones de redención social. Sumemos aquí varios exgobernadores señalados por corrupción y lazos criminales; investigaciones periodísticas sobre conflictos de interés, impunes, en las más altas esferas; gobierno y líderes partidistas que arrastran los pies en reformas anti-corrupción. La fábula de la élite expoliadora que ha convertido los cargos públicos en botín, parece autocumplirse.

Por el otro lado, en la economía pura y dura, una desgastada promesa transformadora—disciplina hoy, modernidad mañana—, la misma que anima a todos los gobiernos desde la transición. Se repite con apenas cambio, pero se topa ya con natural incredulidad, cinismo incluso, tras extensiones crónicas del plazo. El crecimiento de las últimas décadas es desigual y mediocre (en promedio, el producto real por persona ha crecido sólo un 1.1% por año en los últimos 25); las brechas regionales agudas (a grandes rasgos, una fractura norte-sur que se hace más honda); la pobreza persistente (población con ingresos debajo de la línea de bienestar en 1992: 53.1%; 2016:

50.6%); el mercado laboral estructuralmente disfuncional (población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria básica en 2005: 35%; 2017: 41%).

Como proyecto colectivo, el de la “cultura de la competencia” y las “reformas estructurales” (la última ronda, a inicios del presente sexenio) parece políticamente desfundado. Salvo a los más devotos, a nadie entusiasma. Al mismo tiempo, y no sólo en México, no toma forma una alternativa del todo coherente, capaz de aglutinar el descontento extendido y proyectarlo hacia algo nuevo (¿qué sigue?). La articulación política tiene entonces un tono sobre todo nostálgico, lo que en México quiere decir “desarrollo estabilizador” y nacionalismo revolucionario. El petróleo tiene un valor económico, también simbólico (aunque conlleve omitir nuevas prioridades: medio ambiente y cambio climático no preocupaban en los años treinta; deberían hacerlo ahora). Aunado al giro proteccionista en la política estadounidense, con todo y anti-mexicanismo xenófobo, el clima parece favorable al discurso nacionalista de la izquierda de MORENA.

El planteamiento se centra en una revisión prudente de las reformas liberalizadoras de los gobiernos del PRI y del PAN, también de contratos de infraestructura y petroleros (aquí se funden las dos grandes narrativas: el combate a la corrupción y la protección del interés nacional). Además, estímulo al mercado interno para fomentar el crecimiento, que pasa por la corrección de los salarios y el fomento industrial. Y sobre todo—éste es el núcleo—revitalizar la función social del Estado. Tiene sentido.

La paradoja es que ello no demanda la construcción fiscal del Estado, una redefinición en sentido progresivo de las obligaciones tributarias, a fin de cuentas pilar de los proyectos nacionales de edificación de estados de bienestar. Es difícil hablar de impuestos como el medio primario de cooperación entre los unos y los otros en las sociedades modernas, no sólo por estrategia (¿quién vota por más impuestos?), sino por las premisas del planeamiento mismo: en el origen del atraso está el aparato estatal, que en manos de la élite, es corrupto y suntuoso; por ello basta con una dirección honesta y austeridad republicana (versus el despilfarro como cualidad monárquica, es decir presidencial). La frugalidad es la prueba de la honestidad, en la sociedad como en el gobierno. El resultado es una presencia dual del Estado en el discurso político de la izquierda en campaña: ente protector y agente de transformación social, también una agencia que organiza la explotación, obligada por principio a adelgazar y detener su gasto.

Para atajar las suspicacias, hay simultáneamente una estrategia bien calculada, acaso duramente aprendida. Por ejemplo, la presentación anticipada de un gabinete con figuras moderadas y al inicio de la campaña, una carta abierta al sector empresarial y financiero, asegurando una gestión sin desequilibrios macroeconómicos, respetuosa de los derechos de propiedad.

Parece claro que en la boleta presidencial están en juego programas de gobierno que demandarían mejor elaboración y discusión, pero en última instancia distintos en lo económico y social. Los estilos y trayectorias personales también varían, y acaparan la atención, pero en la raíz la lucha mantiene un significado programático. Es clave, porque la democracia sin alternativas engendra sus propios demonios.

Nota final

¿Qué pasará el 1 de julio? Una cosa es segura. Ningún fuerza lo ganará todo, el presidente deberá buscar acuerdos con un Congreso dividido, el poder se repartirá entre partidos a lo ancho y a lo largo en el sistema federal. Aunque el foco está sobre la elección presidencial, se elige además el Congreso entero (500 diputados y 128 senadores), 8 de 31 gubernaturas, la jefatura de la Ciudad de México, dos terceras partes de las alcaldías del país, entre otras. Desde que las elecciones son libres y equitativas, ningún presidente se ha acercado siquiera a convencer a una mayoría absoluta. Desde 1997, ningún partido controla suficientes escaños legislativos para pasar por sí mismo una sola reforma. Ambos datos habrán de repetirse, fruto del genuino pluralismo político que cruza a la sociedad mexicana. Terminamos así en el principio: para que la democracia marche, que así se reconozca.